

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Junio 26 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido por el C. Jesus M. Alcántara ante el Juez de Distrito de Querétaro, contra la Orden de embargo expedida por el Recaudador de rentas de San Juan del Río por adeudo de contribuciones, con cuya providencia cree el quejoso que se viola la garantía á que se refiere el art. 16 de la Constitución federal, en virtud de que los decretos que establecen dichas contribuciones, han sido expedidos por el Gobernador y Legislatura del Estado que no ejercen autoridad legítima; y considerando: que el C. Alcántara expresó como causas de ilegitimidad respecto de la Legislatura, que se instaló sin que hubiera el número de diputados necesario para formar *quorum*; y respecto del Gobernador, que el C. Julio María Cervantes fué declarado Gobernador contra lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución del Estado que prohíbe la reelección; siendo así que la Legislatura se instaló con siete diputados, número que forma el *quorum* de ella: que si en las elecciones de diputados por el Distrito de Amealco hubo vicios constando que realmente fueron electos por tal Distrito, solo á la Legislatura del Estado toca, como cuerpo electoral, calificar y apreciar estos vicios; que si al hacerse la declaración de Gobernador la Legislatura infringió el artículo 77 de la Constitución del Estado, esta infracción por sí sola no puede ser objeto de amparo de garantías, sino de apreciación de la misma Legislatura como cuerpo electoral.

Por todas estas consideraciones, y de acuerdo con lo prevenido en el artículo 19 de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta: Primero: que es de revocarse y se revoca la sentencia del Juez de Distrito de Querétaro que amparó al quejoso. Segundo: La Justicia de la Unión no ampara ni protege al C. Jesus M. Alcántara, contra la Orden de embargo expedida por el Re-

caudador de rentas de S. Juan del Río, por adeudo de contribuciones.—Devuélvanse las actuaciones al juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Arteaga.*—*José María Lozano.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Julio 29 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el juzgado de Distrito del Estado de México por Antonio Santa Ana, contra su consignación al servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C Juez 1º suplente.

El Promotor fiscal dice: que el C. Antonio Santa Ana con fecha 17 de Mayo último, interpuso el recurso de amparo por violación de garantías, contra el C. Cefe Político de esta Ciudad, porque sin su consentimiento lo consignó al depósito de reemplazo para cubrir las bajas del Ejército.

La autoridad responsable en su informe de 19 de Mayo, expresa que por vago y con arreglo á las instrucciones que tiene del Gobierno del Estado, destinó al contingente al expresado Santa Ana. Ninguna justificación acompaña sobre el particular, pero aun cuando así hubiese sido, sin embargo

subsistiría la infracción de la ley, por que ninguna disposición del Gobierno del Estado debe de ser atendible antes que la Constitución general de la República. El artº 5º de este código prohíbe la prestación de servicio alguno personal contra la voluntad, y Antonio Santa Ana se halla en este caso, pues sin su consentimiento se le destina á servir en el ejército federal. La infracción del art. constitucional es notoria, y la violación de la garantía es evidente.

Por lo mismo, el que suscribe, con fundamento del expersado art. 5º de la ley de 20 de Enero de 1869, pide el Juzgado se sirva declarar: que la justicia de la Union ampara y protege al referido Antonio Santa Ana, contra la determinación de la Gefatura política que lo consignó al servicio de las armas en el ejército federal. Toluca Junio 11 de 1873.—Ovallos

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Toluca, Junio 19 de 1873. Visto este recurso de protección y amparo promovido por el C. Antonio Santa Ana, vecino de esta Ciudad, contra la providencia del C. Gefe Político de este Distrito por la que lo consignó al servicio de las armas en el ejército federal. Vistos: la suspensión del acto reclamado; el pedimento del C. Promotor fiscal; el alegato de este; la citación para sentencia; con todo lo demás que debió verse y se tuvo presente. Considerando: que del curso del quejoso aparece que este no ha prestado su consentimiento para ejecutar el servicio á que se le consignó, por cuyo motivo, al destinarle al servicio de las armas, se ha violado la garantía que otorga el art. 5º del pacto fundamental de la República. Considerando: que aunque el quejoso Antonio Santa Ana no rindió prueba alguna, sin embargo, no era esta necesaria, puesto que la autoridad responsable no niega el hecho principal que es la consignación al servicio de las armas;

y considerando por último: que la misma autoridad responsable no ha fundado ó justificado su procedimiento como debía haberlo hecho en virtud del art. 9º de la ley de 20 Enero de 1869.

Por estas consideraciones y con fundamento del art. 1º frac. 1ª de la citada ley y del art. 5º de la Constitución general, fallo 1º: que la justicia de la Union ampara y protege al C. Antonio Santa Ana contra la providencia dictada por el C. Gefe Político de este Distrito, que lo consignó al servicio de las armas en el ejército federal. 2º: sacadas las copias de estilo remítase este juicio á la Suprema Corte de Justicia para su revisión, y 3º: Hágase saber; así definitivamente juzgando lo sentenció y firmó el C. Lic. Petronilo Cano, juez primero suplente de Distrito en el Estado de México—Doy fé—*Petronilo Cano—Francisco del Valle.*

Son copias de sus originales. Toluca, Junio 19 de 1873—*Francisco del Valle*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Junio 30 de 1873. Visto el juicio de amparo promovido por Antonio Santa Ana, ante el Juzgado de Distrito del Estado de México, contra el Gefe político de Toluca D. T. Tuñón Cañedo, que consignó al quejoso al servicio de las armas, y considerando: que en el expediente aparece, que el referido Gefe político ha vulnerado en la persona del quejoso la garantía á que se refiere el artículo quinto de la Constitución federal, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio el 19 del actual, por el Juzgado de Distrito del Estado de México, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Antonio Santa Ana, contra la providencia dictada por el C. Gefe político de To-

luca que lo consignó al servicio de las armas en el ejército federal.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que forman el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 13 de Agosto de 1878.—*Lic. Enrique Landa.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro por Don Ramon O. Felid, en representacion de su padre D. Hermenegildo, contra la orden de embargo en bienes del quejoso, que libró la oficina de Contribuciones de ese Estado.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Ramon O. Felid, en representacion de su padre D. Hermenegildo, ha interpuesto el recurso de amparo, por exigírsele el pago de contribuciones por las autoridades del Estado, que en su concepto no son competentes, por irregularidades habidas en las elecciones respectivas.

De las pruebas rendidas por el quejoso aparece; primero: que el actual Congreso se instaló con siete Diputados, entre los que

figuran D. Jesus Córdova y D. Ramon Quetzada por el Distrito de Amecameco. Segundo: que en el Congreso anterior figuraron de Diputados, tambien por Amecameco, D. Juan N. Rubio y D. Eleuterio Frias y Soto. Tercero: que el nombramiento de dos Diputados para el presente Congreso, no podía haberse hecho por el mismo Distrito (artículos 35 y 36 de la Constitucion del Estado). En consecuencia, la Legislatura actual se instaló sin *quorum*, porque de los siete individuos que la formaron primitivamente, uno al menos no era Diputado.

Como el artículo 16 de la Constitucion federal prevenga que nadie pueda ser molestado sino en virtud de mandamiento escrito por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; resulta de allí, que en concepto de Felid la Legislatura no puede imponer contribuciones por faltarle el carácter de autoridad competente para ello.

Consta de autos, que la Legislatura actualmente se compone de trece miembros, habiéndose instalado con siete, indispensables para formar *quorum* (artículo 42 de la Constitucion del Estado). Tambien consta, que el actual Vice-Gobernador del Estado, en ejercicio del Poder Ejecutivo, fué electo popularmente, sin tener para ello impedimento constitucional, como el C. Julio M. Cervantes, cuya permanencia en el Gobierno, es incompatible con la Carta local. Para tomar en consideracion el raciocinio que se hace para demostrar que los Diputados electos por Amecameco, no tienen carácter legal, sería indispensable volver á decidir un punto ya resuelto por la Legislatura del Estado erigida en colegio electoral, única autoridad á quien corresponde resolver las dudas que pudieran ofrecerse sobre las elecciones de sus miembros.

Esto supuesto, presentándose ante V. un punto decidido por la autoridad competente; y que excede los límites de la competencia de los Tribunales federales, es claro que este Juzgado debe abstenerse de conocer;